



Tiempo de lectura: 4 min.

[Antonio de la Cruz](#)

Durante meses, los venezolanos aprendieron a interpretar el sonido de los helicópteros como una señal de amenaza. El ruido metálico sobre Caracas anunciaba redadas, traslados clandestinos, ejercicios militares o simplemente recordaba que el poder podía descender del cielo en cualquier momento. Esta vez, sin embargo, fue diferente.

La semana pasada, dos aeronaves MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines de Estados Unidos aterrizaron en la embajada estadounidense en Caracas como parte de un simulacro oficial de evacuación. La operación fue autorizada por el interinato venezolano, anunciada públicamente por el canciller Yván Gil y contó con la presencia del jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, en la capital y el jefe de estación de la CIA en Caracas.

No hubo disparos. No hubo protestas masivas. Nadie intentó impedir la operación. Y en esa ausencia de reacción reside, probablemente, el hecho político más relevante de toda la escena.

No se trató únicamente de un ejercicio militar. Fue una representación cuidadosamente coreografiada del nuevo orden político venezolano: un escenario de soberanía compartida o, más precisamente, de soberanía condicionada.

Hace pocos años, un sobrevuelo militar estadounidense sobre Caracas habría sido presentado por el chavismo como una agresión imperialista. La televisión estatal habría difundido imágenes de movilización popular y discursos cargados de referencias a Bolívar, al antiimperialismo y a la defensa de la dignidad nacional. Pero en la Venezuela posterior a enero de 2026, el lenguaje ha cambiado. La presencia militar estadounidense ahora se describe en términos de “cooperación”, “estabilización” o “respuesta rápida ante emergencias”.

Las palabras importan, porque los regímenes también se sostienen con ellas.

Los sistemas autoritarios contemporáneos no operan únicamente mediante la represión. Funcionan también a través de la administración de percepciones: reescriben significados, transforman derrotas en acuerdos, convierten la subordinación en pragmatismo y normalizan lo que antes era excepcional. Eso es lo que ocurrió en Caracas.

Las imágenes eran demasiado simbólicas para ser casuales: aeronaves militares estadounidenses aterrizando en una ciudad donde, apenas meses antes, una operación especial había capturado a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en una incursión nocturna que alteró profundamente el equilibrio regional.

Aquella operación no solo cambió un régimen; modificó la arquitectura psicológica del poder en Venezuela. Durante décadas, el chavismo construyó un relato basado en su invulnerabilidad. Podía haber sanciones, aislamiento o crisis económica, pero el núcleo del poder permanecía intacto. La revolución prometía permanencia. La captura de Maduro destruyó esa ilusión. El mensaje fue claro: el Estado venezolano ya no controlaba plenamente su monopolio de la fuerza.

Desde entonces, Venezuela ha comenzado a parecerse menos a una dictadura clásica latinoamericana y más a un territorio administrado bajo supervisión externa.

No se trata de una ocupación formal. No hay autoridades estadounidenses gobernando desde Miraflores ni símbolos visibles de control directo. Sin embargo, existen mecanismos más sofisticados: licencias petroleras condicionadas, supervisión financiera internacional, reapertura diplomática bajo términos externos,

monitoreo de ingresos energéticos y una presencia militar simbólica con capacidad de activarse cuando sea necesario.

El simulacro en Caracas funcionó como una demostración pública de esta nueva realidad.

Las democracias occidentales suelen justificar este tipo de arreglos en nombre de la estabilidad, una palabra particularmente atractiva en un país exhausto. Tras años de hiperinflación, migración masiva, colapso institucional y violencia, una parte importante de la población estaría dispuesta a aceptar casi cualquier fórmula que reduzca la incertidumbre cotidiana.

Ese es el dilema central de Venezuela.

No necesariamente se está produciendo una transición democrática. Lo que emerge es un modelo híbrido, ambiguo, en el que el orden precede a la legitimidad.

La prioridad de Estados Unidos parece clara: evitar el caos regional, proteger los flujos energéticos, contener redes criminales transnacionales y reducir la presión migratoria. En ese marco, Venezuela deja de ser solo un problema ideológico y pasa a convertirse en un activo estratégico.

Por eso las escenas recientes resultan tan reveladoras. La presencia militar estadounidense no fue presentada como una ruptura, sino como parte del funcionamiento normal del sistema. Los helicópteros aterrizaron entre ambulancias, bomberos y protocolos administrativos. El lenguaje burocrático sustituyó al lenguaje de guerra.

Así operan las nuevas formas de poder internacional: no requieren una ocupación total, sino el control de puntos críticos como el petróleo, las finanzas, la seguridad y la legitimidad diplomática.

En teoría, Venezuela sigue siendo un Estado soberano. En la práctica, sus decisiones fundamentales dependen cada vez más de redes externas de validación política y económica.

Sin embargo, el elemento más inquietante no es la presencia de Washington, sino la rapidez con la que la sociedad venezolana parece haberse adaptado.

La normalización en contextos de trauma ocurre con velocidad. Primero desaparecen los escándalos, luego el asombro y finalmente la memoria.

La reapertura de la Embajada estadounidense fue presentada como el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral. Pero los nuevos capítulos también pueden escribirse en forma de silencios. La cuestión de fondo es qué tipo de país emerge cuando la estabilidad depende de manera permanente de la supervisión externa.

Los protectorados modernos ya no se parecen a los del siglo XX. No requieren administraciones coloniales ni ocupaciones prolongadas. Funcionan a través de contratos, licencias, asistencia militar, arbitraje financiero y dependencia energética. Son sistemas diseñados para gestionar riesgos.

Y Venezuela, tras años de deterioro institucional, se ha convertido precisamente en eso: un problema geopolítico administrado.

Los helicópteros sobre Caracas no solo representaban capacidad militar. Representaban autorización: permiso para entrar, para operar y para estabilizar.

Tal vez por eso las imágenes resultaron tan perturbadoras. Porque hicieron visible algo que ya era cierto, pero que aún no se había escenificado con tanta claridad: el poder en Venezuela ya no reside completamente en quienes gobiernan desde Miraflores, sino en quienes garantizan que Caracas no vuelva a incendiarse.

*Antonio de la Cruz*

*Director ejecutivo de Inter American Trends*

<https://lapatilla.com/2026/05/27/antonio-de-la-cruz-caracas-despues-del-ruido/>

[ver PDF](#)

[Copied to clipboard](#)